



RESUMEN EJECUTIVO

SIN COSECHAS, NI PROTECCIÓN SOCIAL

EVALUACIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y COBERTURA DE
PROGRAMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN GUATEMALA Y HONDURAS

Junio 2026



Financiado por
la Unión Europea
Ayuda Humanitaria



OXFAM

CRÉDITOS

Sin Cosechas, Ni Protección Social: Evaluación de Seguridad Alimentaria y Cobertura de Programas de Protección Social en Guatemala y Honduras.

Foto de portada: © Oxfam / Carlos Zaparolli

Coordinación de la investigación:

Iván Aguilar, Oxfam en Centroamérica

Agradecimientos:

A los equipos que participaron en la coordinación, revisión y edición de este documento: Juan Filiberto Mendoza, Viviana Rendón desde Acción Contra el Hambre y Carlos Rosales, Omar Ramírez, Víctor Sosa, Karla Castillo y Christian Ferreyra desde Oxfam.

Esta publicación fue elaborada en el marco de las acciones de respuesta humanitaria, resiliencia y medios de vida impulsadas por Oxfam en Centroamérica junto a Acción Contra el Hambre, en Guatemala y Honduras. Para más información sobre los temas tratados en este documento, póngase en contacto con ivan.aguilar@oxfam.org



Este documento abarca las actividades de ayuda humanitaria realizadas con la asistencia financiera de la Unión Europea. Las opiniones expresadas en él no deben interpretarse en modo alguno como la opinión oficial de la Unión Europea. La Comisión Europea no se hace responsable del uso que se pueda hacer de la información contenida en el documento.

INTRODUCCIÓN

Oxfam en Centroamérica y Acción Contra el Hambre, con el apoyo de la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO)¹, han implementado una evaluación integral del nivel de seguridad alimentaria de los hogares rurales en Guatemala y Honduras. Los objetivos de esta evaluación son: aportar evidencia técnica sobre la situación de seguridad alimentaria de los hogares rurales y brindar recomendaciones operativas que fortalezcan la toma de decisiones en políticas públicas, respuesta humanitaria y mecanismos de acción anticipatoria.

La presente Evaluación de seguridad alimentaria y cobertura de programas de protección social en Guatemala y Honduras se ha realizado mediante la aplicación de la metodología CARI (Consolidated Approach for Reporting Indicators of Food Security), incorporando un análisis de la cobertura, focalización y brechas de los programas estatales de protección social, así como la valoración del impacto de las anomalías climáticas (retraso de lluvias y canícula prolongada) en la producción agrícola de autoconsumo. El levantamiento de información se realizó en el periodo del 28 de octubre al 18 de noviembre de 2025 para el caso de Guatemala y del 12 al 21 de noviembre de 2025 para el caso de Honduras.

Guatemala y Honduras enfrentan una situación de seguridad alimentaria rural marcada por una combinación de factores de vulnerabilidad y choques recurrentes en los medios de vida de los hogares más vulnerables. La pobreza, la limitada generación de ingresos, el acceso desigual a tierra, la fragilidad de la agricultura familiar, la exposición a la variabilidad climática, las brechas de género y pertenencia étnica, así como la baja cobertura de los sistemas de protección social, configuran condiciones persistentes de vulnerabilidad para miles de hogares rurales. En este contexto, la inseguridad alimentaria no puede entenderse únicamente como falta inmediata de alimentos, sino como una expresión de desigualdades acumuladas que limitan la capacidad de los hogares para sostener su alimentación en el tiempo. El enfoque integral que adopta la evaluación permite una mayor aproximación a los principales factores que inciden en la seguridad alimentaria de la población rural de ambos países.

El presente resumen ejecutivo presenta una síntesis de la metodología de evaluación, sus principales hallazgos y conclusiones, junto con una serie de recomendaciones.

¹ El contenido del presente documento es responsabilidad exclusiva de las organizaciones implementadoras de la evaluación (Oxfam y ACH) y no refleja necesariamente la posición oficial de la Unión Europea ni de sus instituciones.



© Oxfam / Danelia Avendaño

I. METODOLOGÍA

El estudio realiza una evaluación integral del nivel de seguridad alimentaria de los hogares rurales en Guatemala y Honduras, mediante la aplicación de la metodología CARI, e incorpora un análisis de la cobertura, focalización y brechas de los programas estatales de protección social en relación con la situación de seguridad alimentaria de los hogares, así como la valoración del impacto de anomalías climáticas en la producción agrícola de autoconsumo, con representatividad estadística a nivel nacional y departamental.

La metodología CARI es un enfoque estandarizado desarrollado por el Programa Mundial de Alimentos para medir y clasificar

el nivel de seguridad alimentaria de los hogares de manera integral y comparable, integra distintas dimensiones de la seguridad alimentaria, combinando información sobre el consumo actual de alimentos y la capacidad de los hogares para hacer frente a choques y crisis, lo que permite capturar tanto la situación alimentaria inmediata como las estrategias de afrontamiento que los hogares emplean para sostener su bienestar. Su aplicación se basa en la construcción y análisis conjunto de los indicadores: Food Consumption Score (FCS), Reduced Coping Strategy Index (rCSI), Livelihood Coping Strategies Index (LCSI) y Food Expenditure Share (FES)². A partir de la combinación de estos indicadores, cada hogar es clasificado

² Food Consumption Score FCS (evalúa la diversidad y frecuencia del consumo de alimentos durante un periodo de referencia), Reduced Coping Strategy Index rCSI y Livelihood Coping Strategies Index LCSI (capturan las estrategias que los hogares adoptan cuando enfrentan dificultades para acceder a alimentos, diferenciando entre respuestas de corto plazo y mecanismos más erosivos que afectan los medios de vida), y Food Expenditure Share FES (aporta información sobre la presión económica que representa el gasto en alimentos dentro del presupuesto total del hogar).

en una de las cuatro categorías CARI (seguridad alimentaria, inseguridad alimentaria marginal, moderada o severa) mediante reglas de decisión predefinidas que integran consumo y capacidad de afrontamiento, esta clasificación permite generar resultados comparables entre territorios, poblaciones y momentos en el tiempo, lo que resulta especialmente relevante para el monitoreo, la priorización geográfica y la focalización de intervenciones.

El recojo de información se desarrolló mediante un estudio cuantitativo basado en encuestas presenciales, utilizando un diseño probabilístico por conglomerados en dos etapas, la selección de los lugares muestrales se realizó de forma aleatoria y proporcional al tamaño poblacional, el tamaño muestral se definió a partir de la fórmula estándar para estimación de proporciones con 95% de confianza e incorporando ajustes para un diseño muestral complejo por conglomerados. Con el fin de generar resultados desagregados a nivel departamental, el tamaño final de la muestra respondió a un criterio de dominios de estimación subnacionales. Bajo este enfoque, la muestra en Guatemala alcanzó un total de 2,236 hogares, distribuidos en los 22 departamentos del país; la muestra en Honduras alcanzó un total de 1,630 hogares distribuidos en 16 departamentos del país. El levantamiento de información se realizó en el periodo del 28 de octubre al 18 de noviembre de 2025 para el caso de Guatemala y del 12 al 21 de noviembre de 2025 para el caso de Honduras.

El análisis de la información se desarrolló a partir de la metodología CARI, mediante la construcción de los indicadores señalados a nivel de hogar y su clasificación en las categorías de la escala CARI, integrando de manera conjunta la situación de consumo alimentario y la capacidad de afrontamiento frente a choques y crisis. Se aplicó un análisis

desagregado por país y departamento, así como por variables sociodemográficas relevantes, entre ellas el sexo de la jefatura del hogar, la pertenencia étnica y otras características estructurales. De forma transversal, se incorporó un enfoque de género, prestando especial atención a las brechas en el acceso a alimentos, la diversificación de fuentes de ingreso y las estrategias de afrontamiento entre hogares encabezados por mujeres y por hombres.

La presente evaluación no solo estimó la magnitud y severidad de la inseguridad alimentaria, sino también su relación con factores estructurales y contextuales, para ello, se desarrollaron de forma complementaria módulos analíticos específicos orientados a profundizar en los principales determinantes de la inseguridad alimentaria identificados en el estudio. Estos módulos incluyeron el análisis de la cobertura y focalización de los programas de protección social, la afectación de la producción agrícola de autoconsumo frente a la variabilidad climática, la dinámica migratoria y la recepción de remesas, así como la prevalencia de distintos tipos de violencia de género, analizados en relación con el nivel de inseguridad alimentaria del hogar.

Para efectos del análisis territorial, la información fue organizada utilizando las regiones estadísticas oficiales definidas por los institutos nacionales de estadística de cada país, lo que permitió agrupar los departamentos en unidades analíticas homogéneas y comparables. Esta agrupación permitió capturar de manera más precisa las diferencias territoriales, productivas y socioeconómicas que inciden en la seguridad alimentaria de los hogares rurales, y fortaleció la comparabilidad de los resultados a nivel subnacional en ambos países.

FICHA TÉCNICA DE RESUMEN

Aspecto	Descripción
Nombre del estudio	Evaluación de Seguridad Alimentaria en Hogares Rurales de Guatemala y Honduras, 2025
Periodo de levantamiento	Guatemala: del 28 de octubre al 18 de noviembre de 2025. Honduras: del 12 al 21 de noviembre de 2025.
Cobertura geográfica	Guatemala: 22 departamentos. Honduras: 16 departamentos. El estudio se enfocó exclusivamente en áreas rurales.
Enfoque metodológico	Estudio cuantitativo basado en encuestas presenciales a hogares rurales.
Metodología de referencia	Metodología CARI (Consolidated Approach for Reporting Indicators of Food Security) del Programa Mundial de Alimentos (WFP).
Universo de estudio	Hogares residentes en áreas rurales de Guatemala y Honduras.
Tamaño de muestra	Guatemala: 2,236 hogares. Honduras: 1,630 hogares.
Tipo de muestreo	Diseño probabilístico por conglomerados, multietápico, con selección de unidades muestrales y hogares mediante procedimientos aleatorios y sistemáticos.
Diseño muestral	El tamaño de muestra se estimó con 95% de confianza, máxima variabilidad esperada ($p=q=0.5$), error muestral de referencia no mayor a $\pm 5\%$ a nivel nacional rural, con ajustes por efecto de diseño y no respuesta. La muestra final respondió además a criterios de desagregación departamental.
Error muestral teórico nacional	Guatemala: $\pm 2.1\%$. Honduras: $\pm 2.4\%$.
Fuentes para el marco muestral	Guatemala: Censo Nacional de Población 2018. Honduras: Encuesta Permanente de Hogares 2023.
Selección del informante	Dentro de cada hogar, se seleccionó aleatoriamente a una persona de 18 años o más, residente habitual del hogar, previa obtención del consentimiento informado.
Perfil de entrevistados	Personas adultas de 18 años o más. Se procuró una distribución equilibrada por sexo, cercana a 50% hombres y 50% mujeres en ambos países.
Técnica de recolección	Encuesta presencial cara a cara, mediante cuestionario estructurado.
Clasificación analítica	Los hogares fueron clasificados en cuatro categorías CARI: seguridad alimentaria, inseguridad alimentaria marginal, moderada y severa.
Módulos complementarios	Protección social, producción agrícola de autoconsumo, impacto de anomalías climáticas, migración, remesas y violencia de género en relación con la inseguridad alimentaria.



© Acción Contra el Hambre

II. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN

El principal hallazgo del estudio es que la seguridad alimentaria rural en ambos países se sostiene sobre bases frágiles. Los hallazgos confirman que la inseguridad alimentaria rural en Honduras y Guatemala responde, además de a déficits de consumo inmediato, a una acumulación de condiciones de vulnerabilidad y restricciones: bajos ingresos, alta dependencia de actividades agropecuarias de pequeña escala y baja rentabilidad, limitada capacidad de reserva de alimentos, acceso precario a tierra en una proporción importante de hogares, choques climáticos recurrentes, débil cobertura de protección social estatal, brechas persistentes por género, y otros factores de desigualdad tales como: origen étnico y territorialidad.

Aunque una parte de los hogares logra sostener niveles mínimos de consumo, lo hace en condiciones frágiles y con frecuencia a costa de estrategias de afrontamiento que erosionan sus medios de vida. En otras palabras, comer hoy no equivale necesariamente a estar seguro

mañana. El estudio estima que al menos 5,722,065 de personas (2,812,545 en Guatemala y 2,909,520 en Honduras) se encuentran en situación de inseguridad alimentaria moderada o severa (CIF 3 o superior). La clasificación CARI final muestra que solo 9.5% de los hogares rurales en Guatemala y el 6.6% en Honduras se encuentran en seguridad alimentaria, mientras el resto de los hogares se ubica en condición marginal, inseguridad alimentaria moderada o severa, lo que revela una situación extendida de fragilidad alimentaria rural. En Guatemala, el 50.8% de los hogares se clasifica en condición marginal y el 39.6% enfrenta inseguridad alimentaria moderada o severa. En Honduras, el 48.6% se encuentra en condición marginal y el 44.9% en inseguridad alimentaria moderada o severa. La clasificación final refleja que, aunque muchos hogares mantienen un consumo alimentario aceptable en el corto plazo (Estado Actual), su capacidad para sostener esa situación es limitada debido a alta vulnerabilidad económica y dependencia de estrategias de afrontamiento que erosionan

sus medios de vida. Se debe considerar que estos resultados reflejan la situación de un período en el que los hogares deberían estar en mejores condiciones de seguridad alimentaria, en tanto es la época del año en la que se dispone de cosechas, ingresos por empleo temporal y alimentos a precios más bajos por sobreoferta, sin embargo, los hallazgos muestran un inicio más temprano y severo del período de hambre estacional para 2026, a lo que se adicionan los impactos del fenómeno de El Niño.

Otro hallazgo relevante es que gran proporción de los hogares sostiene su alimentación mediante mecanismos erosivos. En Guatemala, 44.6% de los hogares han utilizado estrategias de emergencia de medios de vida según el LCS-FS. En Honduras, esta proporción asciende a 57.5%. Estas estrategias comprometen la sostenibilidad futura del hogar porque pueden incluir venta de activos, endeudamiento, reducción de gastos esenciales, venta de animales productivos o mecanismos que deterioran la capacidad de recuperación ante nuevos choques. Esta dimensión muestra que la inseguridad alimentaria no solo implica comer menos hoy, sino, además, la erosión progresiva de los recursos que permiten producir, comprar o asegurar alimentos en el futuro.

El gasto en alimentos señala la presión sobre los presupuestos familiares. El 58.0% en Guatemala y 53.1% en Honduras se ubica en categorías moderada o severa de vulnerabilidad económica según FES, lo que significa que destinan más del 65% de su gasto total a la compra de alimentos. Esto confirma que el consumo aceptable observado en parte de los hogares no equivale a estabilidad alimentaria sostenible. Adicionalmente, el 35.9% de los hogares en Guatemala y el 34.1% en Honduras destina más del 75% de su gasto total a alimentos, lo que expresa una situación de fragilidad económica extrema, en tanto gran parte de sus recursos deben destinarse solo a alimentación.

El estudio muestra que el deterioro productivo ligado a la variabilidad climática constituye uno de los principales motores de la inseguridad alimentaria. En Guatemala, entre los hogares con terreno agrícola, 63.3% reportó daños por retraso de lluvias, 52.2% por canícula y 45.0% por lluvias intensas. En Honduras, los porcentajes fueron 65.9%, 47.5% y 46.9%, respectivamente. Las pérdidas promedio estimadas de cosecha alcanzaron 33.7% en Guatemala y 30.8% en Honduras, reduciendo la disponibilidad de alimentos de autoconsumo y aumentando la dependencia del mercado.

La cobertura de protección social resulta insuficiente frente a la magnitud de la vulnerabilidad. Solo 13.0% de los hogares rurales en Guatemala y 14.6% en Honduras reportaron haber recibido ayuda gubernamental durante el último año. Esto revela una brecha significativa entre necesidad y respuesta pública, así como oportunidades de mejora en cobertura, focalización y articulación con medios de vida, agricultura familiar y resiliencia climática.

La migración y las remesas forman parte de las estrategias familiares, pero no compensan las brechas de necesidad. En Guatemala, 16.6% de los hogares reporta tener algún miembro en otro país y 8.6% recibe remesas. En Honduras, la migración tiene mayor peso: 38.8% reporta vínculos migratorios internacionales y 19.5% de hogares rurales entrevistados recibe remesas. Aun así, la mayoría de los hogares rurales no cuenta con este ingreso como red suficiente de protección.

Las desigualdades de género y pertenencia étnica atraviesan los resultados de seguridad alimentaria. Los hogares encabezados por mujeres registran menores ingresos y peores resultados de seguridad alimentaria, brecha que resulta particularmente pronunciada en Honduras. En el caso de Guatemala, además, la inseguridad alimentaria se superpone con desigualdades étnicas, afectando con mayor

fuerza a hogares Maya/Indígena y mostrando señales especialmente críticas en población Xinca. Estos resultados indican que la inseguridad alimentaria rural no se distribuye de manera neutra, e implica que la respuesta institucional no puede limitarse a criterios generales de pobreza o localización territorial, sino que debe incorporar una mirada específica sobre los grupos que concentran mayores desventajas acumuladas.

En conjunto, los resultados de la evaluación sugieren que la inseguridad alimentaria rural

en Guatemala y Honduras es, ante todo, un fenómeno estructural exacerbado por choques que impactan sobre los frágiles medios de vida existentes. Los hogares enfrentan dificultades para producir alimentos, generar ingresos, sostener reservas y recuperarse de choques sin comprometer sus medios de vida futuros. La evidencia apunta a la necesidad de fortalecer políticas de protección social, recuperación productiva, apoyo a la agricultura familiar, sistemas de reserva, con enfoque de género y sensibilidad cultural, así como mecanismos de anticipación frente a la crisis climática.



© Oxfam / Carlos Zaparolli

2.1. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN PARA GUATEMALA

En Guatemala, la situación de seguridad alimentaria rural refleja una vulnerabilidad extendida y estructural. La clasificación CARI final muestra que únicamente el 9.5% de los hogares rurales se encuentra en condición de seguridad alimentaria, mientras que el 50.8% se ubica en condición marginalmente seguro, y el 39.6% enfrenta inseguridad alimentaria moderada (36.3%) o severa (3.3%). Esto

significa que 9 de cada 10 hogares presentan algún grado de inseguridad alimentaria y 4 de cada 10 enfrentan niveles moderados o severos que requieren atención. La clasificación final refleja que, aunque muchos hogares mantienen un consumo alimentario aceptable en el corto plazo (Estado Actual), su capacidad para sostener esa situación es limitada debido a alta vulnerabilidad económica y dependencia

de estrategias de afrontamiento no sostenibles que erosionan sus medios de vida.

Desde el punto de vista sociodemográfico, los hogares rurales presentan un perfil predominantemente adulto, con 51.3% de jefaturas de hogar de 40 años o más, un promedio de 4.58 personas por hogar y un bajo nivel educativo, ya que 64.2% de las personas entrevistadas cuenta únicamente con educación primaria. Predominan los hogares biparentales (59.8%), seguidos por los monoparentales (20.8%), las familias extensas (13.8%) y los hogares unipersonales (5.6%). La desagregación de los hogares monoparentales muestra que el 26.1% corresponde a jefatura femenina, frente a 14.9% con jefatura masculina, lo que confirma una mayor presencia relativa de hogares sostenidos por mujeres bajo esquemas familiares con mayor presión económica y de cuidado.

En términos económicos, el ingreso promedio mensual del hogar rural fue de Q 2,409.97 (USD 317.10), con importantes desigualdades territoriales. Jalapa, Alta Verapaz y Totonicapán registran los ingresos promedio más bajos del país. La brecha de género también es clara: los hogares encabezados por mujeres reportan ingresos promedio de Q 2,106.30 (USD 277.14), frente a Q 2,738.64 (USD 360.35) en hogares con jefatura masculina, es decir, 23.1% menos. Los hogares monoparentales y unipersonales presentan niveles de ingreso inferiores a los hogares biparentales, reforzando la relación entre estructura del hogar y vulnerabilidad económica.

La base económica rural continúa siendo altamente dependiente de actividades agropecuarias de baja rentabilidad. La agricultura de granos básicos constituye la principal fuente de ingreso para el 20.8% de los hogares, pero registra uno de los ingresos más

bajos del conjunto de actividades económicas, con apenas Q 1,713.03 (USD 224.08) mensuales en promedio. Aunque 40.9% de los hogares reporta realizar actividades agrícolas, dentro del total nacional el 59.3% cuenta con terreno agrícola para autoconsumo, mientras que 40.7% no dispone de acceso directo a tierra para este fin. Entre quienes sí cuentan con terreno, la tenencia es predominantemente propia (80.6%), pero persisten formas de acceso más precarias: 14.0% alquila, 4.0% trabaja terreno prestado y 1.5% asociado, es decir que casi 1 de cada 5 hogares con acceso a tierra depende de arreglos no propietarios, lo que limita su estabilidad productiva.

El impacto climático sobre la producción agrícola fue severo y constituye uno de los hallazgos más importantes del estudio. Entre los hogares con terreno agrícola, 63.3% reportó daños o pérdidas por retraso de la temporada de lluvias, 52.2% por canícula y 45.0% por lluvias intensas, configurando una afectación acumulativa en varios territorios. Los tipos de daño muestran que no se trata únicamente de exposición climática, sino de pérdidas concretas sobre la producción: entre los afectados por retraso de lluvias, 51.9% reportó pérdida parcial de siembra y 28.4% pérdida total; en el caso de la canícula, 53.9% reportó pérdida parcial y 26.8% pérdida total; en el caso de lluvias intensas, 54.4% reportó pérdida parcial y 27.6% pérdida total. En promedio, los hogares productores estiman haber perdido 33.7% de su cosecha esperada, con niveles especialmente altos en Baja Verapaz (69.3%), Alta Verapaz (49.3%), El Progreso (49.0%), Chiquimula (46.6%) y Jalapa (44.0%). Este deterioro productivo reduce directamente la disponibilidad de alimentos de autoconsumo y eleva la dependencia del mercado.

La capacidad de reserva de granos básicos también es limitada. A nivel nacional, 60.4% de

los hogares no cuenta con reservas, y entre quienes sí las tienen predominan reservas de corta duración: 42.9% dispone de grano para dos semanas o menos. El 53.3% de las reservas disponibles fueron adquirida por compra y solo 45.3% proviene de producción propia, lo que evidencia que la capacidad de reservar alimentos depende en gran medida del poder adquisitivo.

La dimensión de desigualdad aparece con claridad en los indicadores alimentarios. Aunque el PCA muestra 87.8% de hogares con consumo aceptable, este dato debe interpretarse con cautela. Por etnicidad, la población Maya/Indígena y Garífuna registran 15.8% y 31.5% respectivamente, en consumo límite, cifras que duplican y triplican el 6.3% registrado en la población mestiza/ladina. En estrategias de afrontamiento, la población Xinca muestra el escenario más crítico: 66.2% de los hogares presenta rCSI de 4 o más, por encima de la población Maya (53.8%) y mestiza (54.3%). Los hogares con jefatura femenina enfrentan 44.1% de inseguridad alimentaria moderada o severa, frente a 34.8% en los hogares con jefatura masculina. En relación con la niñez, los hogares con presencia de NNA elevan su proporción en consumo límite a 12.4%, lo que indica que la carga de dependencia en hogares con menores, lejos de ser mitigada por programas de asistencia, está presionando la capacidad de consumo de las familias hacia niveles críticos.

La cobertura de programas de protección social gubernamental es claramente insuficiente frente a la magnitud de la vulnerabilidad observada. Solo 13.0% de los hogares rurales reportó haber recibido ayuda del gobierno en el último año. Aunque algunos departamentos con mayor afectación climática e inseguridad alimentaria muestran coberturas más altas

que el promedio, la asistencia sigue siendo baja incluso en territorios críticos. Por ejemplo, Alta Verapaz registra 59.8% de hogares en inseguridad alimentaria moderada-severa y 89.2% de hogares utilizando estrategias de emergencia, pero solo 10.8% de los hogares reporta haber recibido ayuda gubernamental. El tipo de ayuda predominante es alimentaria (63.7%), seguida de transferencias monetarias (24.8%), mientras que apenas 9.8% recibe insumos agropecuarios, lo que sugiere un sesgo hacia respuestas de corto plazo y poca inversión en protección o recuperación de medios de vida.

Un factor que complejiza la situación alimentaria es la violencia y especialmente la violencia basada en género. 6.9% de los hogares han reportado episodios de violencia ocurridos en el último año, aunque con concentraciones territoriales importantes en Zacapa, Jalapa, Petén e Izabal. En cuanto a violencia hacia las mujeres, 13.1% de los hogares reporta haber escuchado casos en su comunidad, y 2.1% reporta violencia dentro del hogar.

La migración constituye una estrategia económica relevante para los hogares rurales: 16.6% de los hogares reportó tener al menos un miembro viviendo en otro país, lo que indica que aproximadamente uno de cada seis hogares entrevistados en Guatemala tiene vínculos migratorios internacionales activos; a la vez, el 15.4% reportó que algún miembro que vivía fuera del país regresó durante los últimos años. No obstante, solo el 8.6% de los hogares recibe remesas, lo que indica que la migración no se traduce de forma generalizada en una red económica suficiente para compensar la precariedad estructural.

2.2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN PARA HONDURAS

En Honduras, la situación de seguridad alimentaria rural es aún más crítica y generalizada. La clasificación CARI final muestra que únicamente el 6.6% de los hogares rurales se encuentra en condición de seguridad alimentaria, el 48.6% está en situación marginal y el 44.9% enfrenta inseguridad alimentaria moderada (43%) o severa (1.9%). En términos agregados, esto implica que 93.4% de los hogares rurales presenta algún grado de inseguridad alimentaria y casi la mitad se ubica en niveles que requieren atención prioritaria; en otras palabras, aproximadamente 9 de cada 10 hogares rurales en Honduras experimentan algún nivel de inseguridad alimentaria y más de 4 de cada 10 enfrentan niveles moderados o severos que requieren atención.

Desde el punto de vista sociodemográfico, la población evaluada presenta un perfil predominantemente adulto, con 56.3% de jefaturas de hogar de 40 años o más, un promedio de 3.85 personas por hogar y un nivel educativo bajo, con 71.4% de las personas entrevistadas que cuentan solo con educación primaria. Respecto a la conformación familiar: 44.2% de los hogares es biparental, 25.6% monoparental, 20.4% corresponde a familias extensas y 9.8% a hogares unipersonales; este patrón refleja una estructura familiar más fragmentada y con mayor peso de hogares sostenidos por un solo adulto o por redes familiares ampliadas.

El ingreso promedio mensual del hogar rural en Honduras fue de L 8,856 (USD 334.82), con importantes desigualdades territoriales y de género. Los hogares con jefatura femenina reportan ingresos promedio de L 6,773.02 (USD 256.07), frente a L 11,061.36 (USD 418.20) en hogares con jefatura masculina, lo que representa 38.8% menos. Esta brecha

económica se refleja también en la seguridad alimentaria: los hogares encabezados por mujeres presentan 51.0% de inseguridad alimentaria moderada o severa, frente a 38.3% en los hogares encabezados por hombres.

La economía rural hondureña mantiene una alta dependencia de la agricultura, aunque bajo condiciones de gran fragilidad. La agricultura de granos básicos constituye la principal fuente de ingreso para 40.0% de los hogares, pero sus retornos se ubican 22.5% por debajo del promedio nacional rural (L 8,856 – USD 334.82). Respecto al acceso a la tierra, 55.1% de los hogares cuenta con terreno agrícola para autoconsumo y 44.9% no dispone de este recurso. Entre quienes sí tienen acceso, el 69.5% posee terreno propio, 15.2% alquila, 13.7% trabaja terreno prestado y 1.6% asociado; en consecuencia, 30.5% de los hogares productores depende de arreglos no propietarios, lo que incrementa la inestabilidad productiva y reduce incentivos para invertir en la parcela.

El impacto climático fue severo y generalizado. Entre los hogares con terreno agrícola, 65.9% reportó daños por retraso de lluvias, 47.5% por canícula y 46.9% por lluvias intensas. El tipo de daños confirma un deterioro productivo importante: predominan la pérdida parcial de siembra (49.4%), la pérdida total (43.5%), la necesidad de volver a comprar insumos (27.1%) y la necesidad de volver a sembrar (21.6%). Los hogares productores estiman haber perdido en promedio 30.8% de su producción esperada, con niveles particularmente altos en Choluteca (45.2%), Valle (39.8%), Yoro (38.6%), Colón (35.1%) y Atlántida (34.7%). Esto confirma que la inseguridad alimentaria rural en Honduras se encuentra estrechamente asociada al deterioro de la base productiva.

La situación de reservas de granos básicos también es crítica. A nivel nacional, 64.0% de los hogares no cuenta con reservas, y entre quienes sí las tienen predominan reservas de corta duración. La capacidad de mantener disponibilidad alimentaria es, por tanto, muy limitada y depende en gran medida de compras y no exclusivamente de la producción propia, profundizando la exposición a la volatilidad de ingresos y precios.

En los indicadores alimentarios, el PCA muestra 93.9% de hogares con consumo aceptable, pero este resultado vuelve a ser insuficiente para interpretar la seguridad alimentaria de manera integral. Existen focos de vulnerabilidad por género, etnicidad y composición del hogar. Las mujeres presentan casi cuatro veces más probabilidad de ubicarse en consumo pobre (1.9%) que los hombres (0.5%). La vulnerabilidad se concentra particularmente en las poblaciones Lenca y Garífuna, con 8.5% y 5.9% respectivamente en consumo límite, por encima de la media nacional. Los hogares con NNA presentan 98.0% de consumo aceptable, incluso por encima de los hogares sin menores; sin embargo, lejos de implicar ausencia de vulnerabilidad, este hallazgo sugiere una priorización doméstica del consumo infantil a costa de sacrificios en otras dimensiones del bienestar del hogar.

Esta interpretación se confirma con los indicadores de afrontamiento. El rCSI muestra que 61.4% de los hogares presenta estrés alimentario y el LCS-FS revela que 57.5% ya se encuentra utilizando estrategias de emergencia que comprometen gravemente la sostenibilidad

futura de sus medios de vida. La clasificación CARI final confirma que la seguridad alimentaria aparente, observada en el PCA, no descansa sobre condiciones estables, sino sobre niveles muy altos de sacrificio económico y productivo.

La cobertura de programas gubernamentales resulta insuficiente. Solo 14.6% de los hogares reportó haber recibido ayuda del gobierno en el último año. Aunque entre quienes reciben apoyo la satisfacción reportada es relativamente alta, la brecha entre la magnitud de la necesidad y la cobertura efectiva sigue siendo muy amplia. Además, la heterogeneidad territorial en la cobertura no siempre coincide con los territorios de mayor vulnerabilidad alimentaria, lo que plantea desafíos de focalización.

Un factor que complejiza la situación alimentaria es la violencia. Se observan niveles departamentales relevantes de victimización y reportes comunitarios de violencia hacia las mujeres, particularmente en Comayagua, El Paraíso, Choluteca y Cortés, lo que añade presión al entorno social de los hogares.

La migración internacional constituye una importante estrategia económica: 38.8% de los hogares rurales reportó tener algún miembro de la familia viviendo en otro país y el 14.0% reporta el retorno migratorio de un familiar en los últimos años. Además, el 19.5% de los hogares entrevistados ha recibido remesas en los últimos dos meses. Sin embargo, la cobertura y monto de las remesas recibidas son insuficientes para compensar las brechas estructurales de ingreso y la exposición a la inseguridad alimentaria.

2.3. PRINCIPALES INDICADORES DE LA EVALUACIÓN

SÍNTESIS DE PRINCIPALES INDICADORES DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA, VULNERABILIDAD PRODUCTIVA Y BRECHAS SOCIODEMOGRÁFICAS IDENTIFICADOS EN LOS HOGARES RURALES EVALUADOS EN GUATEMALA Y HONDURAS.

Dimensión	Indicador	Guatemala	Honduras
Cobertura del estudio	Muestra rural efectiva	2,236 hogares	1,630 hogares
	Cobertura territorial	22 departamentos	16 departamentos
Seguridad alimentaria (CARI final)	Hogares seguros alimentariamente	9.5%	6.6%
	Hogares en condición marginal	50.8%	48.6%
	Hogares con inseguridad alimentaria moderada o severa	39.6%	44.9%
Consumo vs. fragilidad	Hogares con consumo aceptable (PCA)	87.8%	93.9%
	Hogares con estrategias de emergencia (LCS-FS)	44.6%	57.5%
Ingresos	Ingreso promedio mensual del hogar rural	Q 2,409.97 (USD 317.10)	L 8,856 (USD 334.82)
	Brecha de ingreso por sexo de jefatura	Jefatura femenina: 23.1% menos que jefatura masculina	Jefatura femenina: 38.8% menos que jefatura masculina
Brechas de género	Inseguridad alimentaria moderada o severa según sexo de jefatura	Jefatura femenina: 44.1% / masculina: 34.8%	Jefatura femenina: 51.0% / masculina: 38.3%
Tierra para autoconsumo	Hogares con terreno agrícola para autoconsumo	59.3%	55.1%
	Hogares sin acceso a terreno para autoconsumo	40.7%	44.9%
	Tenencia no propia entre quienes sí tienen terreno	19.5%	30.5%
Reservas de granos	Hogares sin reservas de granos básicos	60.4%	64.0%
Impacto climático en producción	Hogares productores afectados por retraso de lluvias	63.3%	65.9%
	Hogares productores afectados por canícula	52.2%	47.5%
	Hogares productores afectados por lluvias intensas	45.0%	46.9%
	Pérdida promedio estimada de cosecha	33.7%	30.8%
Protección social	Hogares que recibieron ayuda del gobierno en el último año	13.0%	14.6%
Migración y remesas	Hogares con migración internacional	16.6%	38.8%
	Hogares que reciben remesas	8.6%	19.5%



© Acción Contra el Hambre

III. PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN

La inseguridad alimentaria rural en ambos países es estructural y no se explica únicamente por déficit de consumo. De acuerdo con las estimaciones del estudio, al menos 5,722,065 personas (2,812,545 en Guatemala y 2,909,520 en Honduras) se encuentran en situación de inseguridad alimentaria moderada o severa (CIF 3 o superior), sin considerar el incremento proyectado para el período comprendido entre mayo y agosto de 2026. Tanto en Guatemala como en Honduras, los resultados muestran que el consumo reciente, por sí solo, ofrece una imagen incompleta del problema. En Guatemala, 87.8% de los hogares registra consumo aceptable, pero solo 9.5% está seguro en CARI final; en Honduras, 93.9% presenta consumo aceptable, pero apenas 6.6% alcanza seguridad alimentaria final. En ambos

casos, la diferencia entre consumo aparente y seguridad alimentaria real demuestra que una parte sustantiva de los hogares mantiene su alimentación bajo condiciones precarias, sosteniéndola con endeudamiento, venta de activos, reducción del gasto en otras necesidades y erosión progresiva de sus medios de vida. Se debe considerar que la evaluación se efectuó en el período de mayor estabilidad en los medios de vida del Corredor Seco, es decir fuera del período de Hambre Estacional, lo que anticipa un 2026 sin reservas de alimentos y mayor precariedad alimentaria para el período de Hambre Estacional de este año.

Los bajos ingresos y la alta carga del gasto alimentario limitan severamente la capacidad de los hogares para absorber choques. En ambos

países, la inseguridad alimentaria se encuentra estrechamente vinculada con restricciones económicas persistentes. Los hogares rurales tienen márgenes económicos muy reducidos. En Guatemala, el ingreso promedio mensual del hogar rural es de Q 2,409.97, equivalente a USD 317.10. En Honduras, el ingreso promedio mensuales de L 8,856, equivalente a USD 334.82. Además, 58.0% de hogares en Guatemala y 53.1% en Honduras se ubican en vulnerabilidad económica moderada o severa según FES, lo que significa que destinan más del 65% de su gasto total a alimentos. Esto deja poco margen para cubrir salud, educación, transporte, vivienda, agua, insumos agrícolas u otras necesidades esenciales. Esto significa que una proporción muy alta de hogares rurales vive con un margen económico extremadamente reducido, de modo que cualquier pérdida de cosecha, alza de precios o reducción de ingresos se traduce rápidamente en deterioro alimentario.

Los choques climáticos están afectando directamente la base productiva de la seguridad alimentaria rural. En los dos países, el retraso de lluvias, la canícula y las lluvias intensas aparecen como factores reiterados y de gran peso en la explicación de la inseguridad alimentaria. En Guatemala, 63.3% de los hogares con terreno reportó daños por retraso de lluvias, 52.2% por canícula y 45.0% por lluvias intensas; en Honduras, las cifras fueron 65.9%, 47.5% y 46.9%, respectivamente. Además, estos eventos no generan solo estrés productivo leve, sino pérdidas concretas de siembra y cosecha. En ambos contextos, el clima está afectando la producción para autoconsumo, reduciendo la disponibilidad de alimentos y obligando a los hogares a depender más del mercado en condiciones de ingresos ya limitados.

La escasez de reservas y la erosión de medios de vida muestran que los hogares están operando sin colchones de protección. La ausencia de reservas y el uso intensivo de estrategias de afrontamiento son dos de los hallazgos más consistentes del estudio. En Guatemala, 60.4% de los hogares no tiene reservas de granos básicos y 68.6% ha recurrido a estrategias que comprometen sus medios de vida; en Honduras, 64.0% no tiene reservas y 82.5% ha utilizado estrategias de erosión de activos, incluyendo 57.5% en estrategias de emergencia. Esto confirma que la crisis alimentaria no solo se expresa en el presente, sino en la disminución acelerada de la capacidad futura de los hogares para sostenerse, producir y recuperarse.

Las desigualdades de género son consistentes en ambos países, y en Guatemala además se superponen desigualdades étnicas relevantes.

La inseguridad alimentaria rural no afecta por igual a toda la población. En ambos países, los hogares con jefatura femenina presentan menores ingresos y peores resultados de seguridad alimentaria: en Guatemala registran ingresos 23.1% menores y 44.1% en inseguridad moderada-severa, mientras que en Honduras los ingresos son 38.8% menores y la inseguridad moderada-severa asciende a 51.0%. En Guatemala, además, la desigualdad se complejiza al incorporar etnicidad: la población Maya/Indígena presenta una proporción mucho mayor de consumo límite que la población mestiza/ladina, y la población Xinca muestra el patrón más crítico en estrategias de afrontamiento. Esto indica que la inseguridad alimentaria rural también es expresión de desigualdades sociales acumuladas.



© Oxfam / Carlos Zaparoli

3.1. PRINCIPALES CONCLUSIONES PARA GUATEMALA

La inseguridad alimentaria rural en Guatemala es amplia, estructural y mucho más profunda de lo que sugiere el consumo reciente. El análisis CARI identifica que 2,812,545 personas rurales se encuentran en situación de inseguridad alimentaria moderada o severa, lo que representa el 40% de la población rural total de Guatemala (6.9 millones). Los resultados confirman que la inseguridad alimentaria en los hogares rurales de Guatemala no puede entenderse únicamente a partir del consumo alimentario observado en el corto plazo. Aunque el 87.8% de los hogares presentó un consumo aceptable según el PCA, la clasificación CARI final muestra que solo el 9.5% se encuentra realmente en condición de seguridad alimentaria, mientras que el 50.8% se ubica en condición marginal y el 39.7% enfrenta inseguridad alimentaria moderada o severa. Esta brecha, entre consumo aparente y seguridad alimentaria efectiva, evidencia que una gran proporción de hogares logra alimentarse en el presente, pero lo hace bajo condiciones inestables y a costa de decisiones que deterioran progresivamente su resiliencia económica y productiva.

La precariedad de ingresos sigue siendo uno de los principales motores de la vulnerabilidad alimentaria. El ingreso promedio mensual del

hogar rural guatemalteco fue de Q 2,409.97, equivalente a USD 317.10, en un contexto donde el tamaño promedio del hogar asciende a 4.58 personas. Esto significa que amplios segmentos de la población rural deben cubrir necesidades alimentarias y no alimentarias con recursos muy restringidos. La desigualdad de género refuerza esta fragilidad: los hogares con jefatura femenina reportan ingresos 23.1% menores que aquellos con jefatura masculina, y esta desventaja se traduce también en peores resultados alimentarios, ya que 44.1% de los hogares encabezados por mujeres se ubica en inseguridad alimentaria moderada o severa, frente a 34.8% en hogares con jefatura masculina. A ello se agrega que los hogares monoparentales, más frecuentes entre jefaturas femeninas, enfrentan una presión económica y de cuidado particularmente alta.

El deterioro productivo asociado al clima está reduciendo la capacidad de autoconsumo y profundizando la dependencia del mercado. El estudio confirma que el impacto climático no es un factor periférico, sino uno de los núcleos explicativos de la inseguridad alimentaria rural. Entre los hogares con terreno agrícola, 63.3% reportó daños por retraso de lluvias, 52.2% por canícula y 45.0% por lluvias intensas.

Los daños no fueron menores: entre quienes reportaron afectación por retraso de lluvias, 51.9% sufrió pérdida parcial de siembra y 28.4% pérdida total; en el caso de la canícula, 53.9% registró pérdida parcial y 26.8% pérdida total. En promedio, los hogares productores estiman haber perdido 33.7% de su cosecha esperada, con departamentos particularmente golpeados como Baja Verapaz (69.3%), Alta Verapaz (49.3%), El Progreso (49.0%), Chiquimula (46.6%) y Jalapa (44.0%). Esta evidencia muestra que la inseguridad alimentaria rural no solo se explica por insuficiencia de ingresos, sino también por una pérdida sostenida de la capacidad de producir alimentos para autoconsumo.

Las reservas de granos y los medios de vida muestran una erosión crítica. La vulnerabilidad alimentaria se vuelve más grave cuando se observa la capacidad de los hogares para sostenerse en el tiempo. A nivel nacional, 60.4% de los hogares no cuenta con reservas de granos básicos y, entre quienes sí las tienen, predominan reservas de corta duración: 42.9% dispone de ellas para dos semanas o menos. Más aún, 53.3% de las reservas fue obtenida por compra y solo 45.3% proviene de producción propia, lo que indica que una parte importante de los hogares ya no logra asegurar sus reservas a partir de la producción agrícola. Esta situación se combina con un fuerte deterioro de los medios de vida: 68.6% de los hogares han recurrido a alguna estrategia que compromete su sostenibilidad futura y 44.6% ya se encuentra utilizando estrategias de emergencia. En otras palabras, una proporción muy alta de hogares no solo está enfrentando dificultades actuales, sino agotando los activos con los que podría recuperarse.

Las brechas de género y etnicidad no son marginales: forman parte de la estructura de la inseguridad alimentaria. Los resultados

muestran que la inseguridad alimentaria en Guatemala no se distribuye de forma homogénea. Además de las brechas por jefatura femenina ya señaladas, la desagregación por etnicidad evidencia desventajas claras. La población Maya/Indígena registra 15.8% en consumo límite, más del doble que la población mestiza/ladina (6.3%). Asimismo, la población Xinca, que representa 4.5% de la muestra nacional y se concentra especialmente en Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa, presenta el patrón más crítico en estrategias de afrontamiento, con 66.2% de hogares ubicados en rCSI de 4 o más. Esto sugiere que la inseguridad alimentaria se entrelaza con desigualdades históricas de exclusión territorial, étnica y económica, y que las respuestas programáticas deben reconocer estas diferencias en lugar de tratarlas como un fenómeno homogéneo.

La cobertura de protección social es claramente insuficiente frente a la magnitud del problema. Solo 13.0% de los hogares rurales reportó haber recibido ayuda del gobierno en el último año, pese a que 39.7% enfrenta inseguridad alimentaria moderada o severa. Esto implica una brecha muy amplia entre necesidad y cobertura efectiva. Incluso en departamentos críticos, la asistencia sigue siendo baja frente al nivel de vulnerabilidad documentado. Alta Verapaz es el ejemplo más claro: 59.8% de sus hogares se ubica en inseguridad alimentaria moderada-severa y 89.2% utiliza estrategias de emergencia, pero solo 10.8% reporta haber recibido ayuda gubernamental. Además, el predominio de ayuda alimentaria (63.7%) y monetaria (24.8%), frente a una presencia mucho menor de apoyo agropecuario (9.8%), sugiere una respuesta más orientada a la contención inmediata que a la recuperación productiva y la resiliencia.



© Oxfam / Danelia Avendaño

3.2. PRINCIPALES CONCLUSIONES PARA HONDURAS

Honduras presenta una inseguridad alimentaria rural más extendida y homogénea que Guatemala. El análisis CARI identifica que 2,909,520 personas rurales se encuentran en inseguridad alimentaria moderada o severa, lo que representa casi el 45% de la población rural total de Honduras (6.4 millones). Solo el 6.6% de los hogares rurales se encuentra en condición de seguridad alimentaria, mientras que el 48.6% está en condición marginal y el 44.9% enfrenta inseguridad alimentaria moderada o severa. En conjunto, esto significa que 93.4% de los hogares rurales presenta algún grado de inseguridad alimentaria. A diferencia de Guatemala, donde la vulnerabilidad muestra contrastes territoriales más marcados, en Honduras la inseguridad alimentaria tiende a presentarse de manera más homogénea, lo que sugiere factores causales más estructurales y sistémicos a escala nacional.

La fragilidad económica rural es más aguda y golpea con mayor fuerza a los hogares encabezados por mujeres. El ingreso promedio mensual del hogar rural hondureño fue de L 8,856, con un tamaño promedio

de 3.85 personas por hogar. Sin embargo, el problema no radica únicamente en el promedio, sino en la fuerte precariedad de una parte importante de los hogares y en las brechas internas. La desigualdad de género es particularmente severa: los hogares con jefatura femenina reportan ingresos 38.8% menores que aquellos con jefatura masculina, una brecha considerablemente más profunda que en Guatemala. Esta desventaja se refleja directamente en la seguridad alimentaria: 51.0% de los hogares encabezados por mujeres se ubica en inseguridad alimentaria moderada o severa, frente a 38.3% en hogares con jefatura masculina. El hecho de que más de la mitad de la muestra tenga jefatura femenina vuelve este hallazgo aún más relevante para la lectura del problema a escala nacional.

La combinación entre acceso precario a tierra, pérdidas agrícolas y escasez de reservas configura una crisis productiva severa. En Honduras, 55.1% de los hogares cuenta con terreno agrícola para autoconsumo, mientras que 44.9% carece de este recurso. Entre quienes sí tienen acceso a tierra, 30.5%

depende de modalidades no propietarias, como alquiler, préstamo o asociación, lo que introduce una inestabilidad productiva más alta que en Guatemala. Sobre esta base ya precaria se superpone una fuerte afectación climática. Entre los hogares con terreno, 65.9% reportó daños por retraso de lluvias, 47.5% por canícula y 46.9% por lluvias intensas. Además, la severidad de los daños fue alta: entre los afectados por retraso de lluvias, 50.4% reportó pérdida total de siembra; en el caso de la canícula, 50.5% también sufrió pérdida total. En promedio, los hogares productores estiman pérdidas de 30.8% de la producción esperada, con afectaciones particularmente elevadas en Choluteca (45.2%), Valle (39.8%), Yoro (38.6%), Colón (35.1%) y Atlántida (34.7%). Esta combinación de precariedad en el acceso a tierra y pérdida recurrente de producción limita severamente la posibilidad de sostener medios de vida agrícolas viables.

La erosión de medios de vida en Honduras alcanza niveles más avanzados. Uno de los hallazgos más importantes es la magnitud del deterioro en las capacidades de afrontamiento de los hogares hondureños. Aunque 93.9% de los hogares presenta consumo aceptable según el PCA, solo 36.1% logra seguridad en el Estado Actual y apenas 6.6% se mantiene seguro en CARI final. Esto evidencia una distancia extrema entre el consumo presente y la sostenibilidad real de ese consumo. La lectura se confirma con los indicadores de afrontamiento: 82.5% de los hogares ha recurrido a alguna estrategia que compromete sus medios de vida y 57.5% ya se encuentra utilizando estrategias de emergencia. Es decir, la inseguridad alimentaria en Honduras no solo está afectando el bienestar actual, sino consumiendo aceleradamente los activos y recursos con los que los hogares podrían recuperarse frente a nuevos choques.

La insuficiencia de reservas y la alta carga del gasto alimentario limitan cualquier margen de resiliencia. A nivel nacional, 64.0% de los hogares no cuenta con reservas de granos básicos. Entre quienes sí las tienen, cerca de 40% dispone de reservas para dos semanas o menos. Aunque 56.7% de esas reservas proviene de producción propia y 39.5% de compra, el volumen total de hogares con capacidad de reservar sigue siendo bajo, lo que refleja la estrechez de la base productiva y económica. A ello se suma una alta vulnerabilidad económica: 53.1% de los hogares destina más del 65% de sus recursos a alimentos y 34.1% se encuentra en vulnerabilidad extrema según FES. Esto indica que, incluso cuando los hogares logran adquirir alimentos, lo hacen sacrificando recursos que deberían destinar a salud, educación, vivienda o inversión productiva.

La respuesta pública es insuficiente y no guarda correspondencia con los niveles de vulnerabilidad. Solo 14.6% de los hogares rurales reportó haber recibido ayuda del gobierno en el último año, pese a que 44.9% enfrenta inseguridad alimentaria moderada o severa. Esto confirma una brecha de cobertura igualmente crítica. Además, la distribución territorial de la ayuda no siempre coincide con los territorios de mayor vulnerabilidad; por ejemplo: Yoro presenta apenas 2.0% de hogares en condición segura, 49.5% en inseguridad moderada-severa y 78.2% utilizando estrategias de emergencia, pero recibe solo 14.9% de cobertura; Choluteca, con 54.0% en inseguridad moderada-severa y 67.0% en estrategias de emergencia, recibe apenas 10.0%. Aunque Honduras muestra una mayor presencia de insumos agropecuarios y transferencias en efectivo dentro de la asistencia, la cobertura total sigue siendo demasiado baja para modificar de manera sustantiva la situación alimentaria observada.



© Acción Contra el Hambre

IV. RECOMENDACIONES

4.1 RECOMENDACIONES GENERALES

- Proporcionar asistencia alimentaria inmediata, preferentemente mediante transferencias monetarias, a los hogares que han experimentado pérdidas superiores al 50% en la producción de granos básicos y que se encuentran en condiciones de inseguridad alimentaria moderada o severa (CIF 3 o superior). Priorizar la atención de niñas y niños con desnutrición aguda o en alto riesgo de padecerla, así como de los hogares dependientes del trabajo jornalero agrícola que actualmente carecen de oportunidades laborales.
- Incorporar el enfoque de género de manera transversal y operativa en todas las intervenciones, más allá de su utilización como criterio de priorización. Los hogares con jefatura femenina presentan menores niveles de ingreso y mayores índices de inseguridad alimentaria moderada o severa en ambos países. En este sentido:
 - garantizar el acceso directo de las mujeres a transferencias monetarias, alimentos, insumos y activos productivos; adaptar los horarios y modalidades de capacitación a las responsabilidades de cuidado; promover servicios de cuidado infantil o mecanismos comunitarios de apoyo durante las actividades programáticas; fortalecer la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones locales; y prevenir riesgos de violencia, explotación o exclusión asociados a la entrega de asistencia.
- La magnitud de la vulnerabilidad identificada requiere que la cooperación internacional complemente y fortalezca la respuesta pública y humanitaria mediante financiamiento flexible, oportuno y sostenido. Este apoyo debe abarcar no solo la asistencia alimentaria de emergencia, sino también la recuperación y diversificación de medios de vida, el fortalecimiento de los sistemas de protección social, la

implementación de mecanismos de acción anticipatoria frente a amenazas climáticas, el desarrollo de infraestructura comunitaria para almacenamiento, el acceso sostenible al agua segura y el fortalecimiento de capacidades locales, incorporando enfoques de género e interculturalidad. Se recomienda priorizar

los territorios y hogares con inseguridad alimentaria moderada o severa, ausencia de reservas alimentarias, pérdidas productivas significativas, jefatura femenina, pertenencia a pueblos indígenas o grupos étnicos, y limitada cobertura de asistencia pública.

4.2. RECOMENDACIONES A LOS MINISTERIOS Y/O SECRETARÍAS DE AGRICULTURA Y PROTECCIÓN SOCIAL

- Considerando que la cobertura de asistencia gubernamental reportada por los hogares es limitada en ambos países (13.0% en Guatemala y 14.6% en Honduras), se recomienda ampliar de manera urgente la cobertura de asistencia alimentaria, preferentemente mediante transferencias monetarias no condicionadas, dirigida a la población clasificada en CIF 3 o superior a partir de julio de 2026. Esta medida contribuirá a prevenir un mayor deterioro de la seguridad alimentaria de los hogares más vulnerables.
- Reducir la dependencia de la agricultura de subsistencia de temporal mediante la promoción de estrategias de diversificación de medios de vida adaptadas a los contextos territoriales. Estas estrategias pueden incluir la producción de traspatio, huertos familiares, crianza de especies menores, transformación y comercialización de alimentos, pequeños emprendimientos, empleo temporal comunitario y formación técnica para el trabajo. La diversificación deberá considerar las oportunidades de mercado, las capacidades productivas de

los hogares, la disponibilidad de tiempo y las responsabilidades de cuidado.

- Evaluar e impulsar mecanismos de aseguramiento agrícola respaldados por recursos públicos, orientados a pequeños productores altamente vulnerables a los efectos de la variabilidad y el cambio climático en el Corredor Seco Centroamericano, con el fin de reducir pérdidas y fortalecer su capacidad de recuperación ante eventos adversos.
- Fortalecer e institucionalizar mecanismos de acción anticipatoria frente a eventos climáticos extremos. Considerando que el retraso en el inicio de las lluvias, la canícula prolongada y los episodios de precipitaciones intensas han afectado significativamente la producción agrícola de autoconsumo, se recomienda desarrollar protocolos de acción anticipatoria vinculados a sistemas de alerta temprana y pronósticos climáticos, que permitan la distribución oportuna de semillas e insumos, la protección de reservas alimentarias y la preparación comunitaria antes de los períodos críticos.

4.3. RECOMENDACIONES A LOS MINISTERIOS Y/O SECRETARÍAS DE SALUD PÚBLICA

- Actualizar y fortalecer las capacidades del personal de salud del primer y segundo nivel de atención en la aplicación de las normas y protocolos de vigilancia, detección y manejo

de la desnutrición aguda, con el propósito de garantizar una atención oportuna y de calidad en las comunidades afectadas.

- Reforzar las estrategias de búsqueda activa de casos de niñas y niños con desnutrición aguda o en riesgo de padecerla, asegurando la adecuada capacitación y estandarización del personal involucrado, así como la disponibilidad de equipos, insumos y recursos logísticos necesarios para su implementación.
- Garantizar el abastecimiento continuo de los insumos requeridos para la atención ambulatoria y hospitalaria de los casos de desnutrición aguda, así como el fortalecimiento de las competencias técnicas del personal de salud para asegurar una respuesta eficaz y conforme a los protocolos establecidos.
- Implementar campañas de comunicación para el cambio social y de comportamiento orientadas a la prevención de enfermedades prevalentes, la promoción de prácticas adecuadas de higiene y alimentación, y el consumo de alimentos nutritivos disponibles localmente, incluyendo combinaciones tradicionales como maíz y frijol.
- Garantizar la incorporación prioritaria de los hogares con niñas y niños que presentan desnutrición aguda, o alto riesgo de padecerla, en los programas de protección social y asistencia alimentaria, con el objetivo de favorecer su recuperación nutricional y prevenir recaídas.

4.4. RECOMENDACIONES A OTRAS INSTANCIAS GUBERNAMENTALES RELEVANTES

- Las instancias rectoras de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN y UTSAN) deben mantener y fortalecer la realización periódica de análisis CIF, con la frecuencia requerida, a fin de monitorear la evolución de la situación alimentaria y nutricional, y proporcionar información oportuna para la toma de decisiones por parte de las instituciones responsables de la respuesta.
- Fortalecer la coordinación interinstitucional para diseñar e implementar un plan integral de fortalecimiento de la resiliencia de los medios de vida vulnerables frente al cambio climático en el Corredor Seco Centroamericano. Dicho plan deberá promover la diversificación económica, la adaptación productiva y la reducción de riesgos, así como la articulación y adaptación de los programas de protección social, para que funcionen como mecanismos de protección anticipada frente a crisis climáticas y alimentarias.
- Incorporar indicadores de inseguridad alimentaria en los criterios de focalización y selección de beneficiarios de los programas regulares de transferencias monetarias. Esta medida permitiría que dichos programas contribuyan de manera más efectiva a reducir las brechas alimentarias generadas por fenómenos adversos, incluyendo los impactos asociados al fenómeno de El Niño previsto para 2026.
- Se recomienda a las corporaciones municipales utilizar la información generada por este estudio para fortalecer los procesos de planificación territorial y asignación presupuestaria en materia de seguridad alimentaria y nutricional, recuperación productiva y gestión del riesgo. Asimismo, se insta a formular, actualizar o reactivar políticas y planes municipales de seguridad alimentaria y nutricional orientados al fortalecimiento de la resiliencia de los medios de vida frente a los efectos de la crisis climática.



 @accioncontraelhambre.ca
 @accioncontraelhambre.ca
 @achguate_
 accioncontraelhambre.org.gt



 @oxfam_ca
 @oxfamCA
 @oxfam_CA
 lac.oxfam.org